

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 1 .- .-

NOMENCLATURA	: 1. [40] Sentencia
JUZGADO	: 29° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-4050-2020
CARATULADO	: SAIEG/FISCO CDE

Santiago, dieciséis de Febrero de dos mil veintidós

VISTOS:

Mario Armando Cortez Muñoz, abogado, y Alex Esteban Sepúlveda Rodas, habilitado de Derecho, en representación convencional de Alfredo Eduardo Saieg Lues, chileno, pensionado, todos domiciliados en Carmen N° 602, dpto. 2611, Santiago, interponen demanda de indemnización de perjuicios, en juicio de hacienda, en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por Juan Antonio Peribonio Poduje, Presidente del Consejo de Defensa del Estado, con domicilio en Agustinas N°n1687, Santiago.

Expone que su representado le relató que fue detenido en su domicilio de Molina 531 D. 53, Valparaíso, el día 28 de marzo de 1974, en un allanamiento realizado por la Armada, siendo conducido al Cuartel Silva Palma, donde permaneció incomunicado, amarrado y con los ojos vendados, lugar en que fue brutalmente torturado, sufrió fuertes golpizas grupales por medio de puños, patadas y objetos, que le generaron heridas, hematomas y fracturas; aplicación de corriente en genitales y otras partes del cuerpo; colgamiento de muñecas con golpes; privación de alimentos, agua y baño; hostigamientos; privación del sueño.

Indica que producto de las sostenidas y brutales torturas fue trasladado en estado de coma al Hospital Naval, recinto en el cual continuó el hostigamiento y los malos tratos. Nuevamente lo trasladaron al Cuartel Silva Palma, donde se reiteraron las torturas antes descritas. Luego fue trasladado al campo de concentración de Puchuncaví, donde fue sometido a plantones a la intemperie, lo privaron de alimentos, agua y baño, obligándolo a realizar ejercicios, al punto de desvanecerse. También fue sometido a simulacros de fusilamiento, golpeado y humillado.



«RIT»

Foja: 1

Agrega que en mayo fue trasladado a la Cárcel Pública de Valparaíso, donde estuvo incomunicado, recibió golpizas y amenazas por parte de funcionarios de Gendarmería, allanaban el recinto donde estaba y golpeaban a los presos políticos. En ese lugar estuvo hasta el 16 de abril de 1975, cuando fue relegado a Antofagasta bajo la custodia de Carabineros, donde permaneció hasta junio de 1978, permanentemente vigilado, seguido y arrestado.

Finalmente, en junio de 1978 fue sobreseído totalmente de la causa del Consejo de Guerra, con todas las irregularidades que eso significaba en la dictadura militar.

Hace presente que por los hechos antes descritos, el demandante fue reconocido como víctima de violación a los Derechos Humanos por el propio Estado chileno, encontrándose en el listado de Prisioneros Políticos y Torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocido también como Informe Valech I.

Sostiene que la vida de Alfredo Eduardo Saieg Lues fue violentamente interrumpida, de tal forma que cambió para siempre, interrupción que se caracteriza por hechos tremendamente inhumanos, abusivos y violentos, que lo transformaron en una víctima, en un sobreviviente de los agentes del Estado al servicio de la dictadura cívico militar chilena. Pero lo más grave es que dicho cambio evidentemente no fue voluntario, ya que se debe a la acción del Estado de Chile, a través de sus agentes.

Contextualiza la situación política social vivida en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973, indicando que hubo una declaración de guerra interna que definió como enemigos a los partidarios del gobierno de la Unidad Popular y a los miembros de los partidos políticos de la izquierda chilena, tomando el control del país las Fuerzas Armadas y de Orden. En razón de aquello, concluye que la prisión política y la tortura constituyeron una Política de Estado del Régimen Militar, definida e impulsada por las autoridades políticas de la época, el que para su diseño y ejecución movilizó personal y recursos de diversos organismos públicos, y dictó decretos leyes y luego leyes que ampararon tales conductas represivas.

Se refiere a la responsabilidad del Estado, indicando que ésta emana de los perjuicios que provocan y causan los órganos de la Administración, lo que está reconocido en la Constitución Política de 1980 y en la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, normativa que aborda de forma



«RIT»

Foja: 1

detallada junto con doctrina relacionada con la materia, indicando que el reconocimiento y la aplicación efectiva de un principio general de responsabilidad patrimonial del Estado constituiría una de las “piezas maestras” dentro del sistema de relaciones jurídicas existentes entre la Administración y los ciudadanos.

Luego efectúa un análisis a la luz del derecho internacional, respecto al hecho ilícito de autos, como un crimen de lesa humanidad, y plantea la imprescriptibilidad de la acción de reparación deducida, de acuerdo a los tratados internacionales suscritos por Chile.

En cuanto al daño moral, señala que el deber de responder por los daños irrogados por vulneración de los derechos fundamentales en el ámbito internacional ha sido abordado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 63.1 dispone que cuando hubo violación de un derecho o libertad protegidos por esta Convención dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

Respecto de Alfredo Eduardo Saieg Lues, indica que fue víctima de detención ilegal y arbitraria, crueles torturas, apremios físicos y psicológicos inhumanos y deliberados. Fue víctima de violaciones a sus Derechos Humanos, de persecución y prisión política, todo por agentes del Estado, siendo dañado en sus aspectos más básicos y trascendentes. Todo esto le generó un gran daño en su vida emocional, personal y laboral, las vejaciones de las que fue víctima han hecho que hasta el día de hoy, no pueda llevar una vida normal a pesar de los esfuerzos que ha realizado por ello, toda vez que sigue sufriendo y siendo atormentado por lo vivido, por lo que solicita a título de daño moral, una indemnización por la suma de \$300.000.000 más intereses, reajustes legales y costas, o, en subsidio, el pago de las sumas y cantidades de dinero que se estime de justicia y equidad, debidamente reajustadas, con intereses y costas.

Con fecha 2 de diciembre de 2020 se notifica la demanda.

Con fecha 21 de diciembre de 2020 el demandado Fisco de Chile contesta la demanda.

Alega la excepción de reparación integral, toda vez que la demanda sería improcedente, porque el actor ya habría sido indemnizado. Reflexiona acerca del



«RIT»

Foja: 1

marco general de los resarcimientos ya otorgados y la complejidad reparatoria, señalando que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del entonces Presidente Patricio Aylwin, en lo que respecta a la justicia transicional, fueron los siguientes: "a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; b) la provisión de reparaciones para los afectados; y, c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse". En lo relacionado con el segundo objetivo, plantea que la Comisión Verdad y Reconciliación o "Comisión Rettig", formuló en su informe final una serie de "propuestas de reparación", entre las cuales se encontraba una "pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas" y algunas prestaciones de salud. Dice que dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el sr. Presidente de la República envió al H. Congreso, que luego se convertiría en la Ley N° 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, "reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas". Por su parte y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación, precisa que el ejecutivo, siguiendo el informe de la Comisión, entendió por reparación: "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe".

Agrega que a dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena en "un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas".

Concluye que la compensación de daños morales y la mejora patrimonial son dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

Asimismo, que una vez asumida esta idea reparatoria, la Ley N° 19.123 y otras normas jurídicas conexas han establecido diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, que explican cómo el país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional, según asevera.

Indica que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones: i) reparaciones mediante transferencias directas de dinero; ii)



«RIT»

Foja: 1

reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y, iii) reparaciones simbólicas.

En cuanto a la reparación mediante transferencias directas de dinero, manifiesta que diversas leyes la habrían establecido, incluyendo a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos. Destaca que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, al mes de diciembre de 2015, en concepto de: a) pensiones, la suma de \$247.751.547.837, como parte de las asignadas por la Ley N°19.123 (Comisión Rettig); b) pensiones por \$ 648.871.782.936, como parte de las asignadas por la Ley N°19.992 (Comisión Valech); c) bonos por \$ 41.910.643.367, asignados por la Ley N°19.980 (Comisión Rettig) y otros \$ 23.388.490.737 por la referida Ley N°19.992; d) desahucios (bono compensatorio) por la suma de \$1.464.702.888, asignados por medio de la Ley N°19.123; y, e) bono extraordinario (Ley N°20.874) por la suma de \$ 23.388.490.737. En consecuencia, al mes de diciembre de 2019 el Fisco habría desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.

Luego de referirse a las otras formas de reparación implementadas, sostiene en materia de identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas, que de todo lo expresado podría concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de Derechos Humanos no solo han cumplido los estándares internacionales de justicia transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad financiera. Por tanto, considerando que la acción se basa en los mismos hechos y se pretende con ella se indemnicen los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias enunciadas, opone la excepción de pago, por haber sido indemnizadas las demandantes en conformidad a la leyes N° 19.123 y 19.980.

A continuación, opone la excepción de prescripción extintiva, que funda, en síntesis, en que según lo que se expuso en la demanda, la detención ilegal y tortura que sufrió el actor, ocurrió desde el día 28 de marzo de 1974 y hasta abril de 1975. Agrega que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura, por la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de Justicia, sino hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda, esto es, al 2 de diciembre de 2020, había transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil.



«RIT»

Foja: 1

Alega la excepción de prescripción de 4 años establecida en dicha norma legal y, en subsidio, la excepción de prescripción de 5 años del artículo 2515, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a la indemnización y la notificación, igualmente transcurrió con creces el plazo legal.

Sobre el particular, indica que por regla general todos los derechos y acciones son prescriptibles y que, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, que en este caso no existe. En el mismo sentido, considera que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras.

Recuerda que la prescripción es una institución universal y de orden público, manifestando que las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil que la consagran y, en especial, de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general, para todo el ordenamiento jurídico y no solo para el ámbito privado. Posteriormente, dice que la jurisprudencia existente en la materia, citando fallos de la Excma. Corte Suprema que a su entender tendrían aplicación para el caso, no otorgarían a la indemnización de perjuicios, cualquiera sea su origen o naturaleza, un carácter sancionatorio, de modo que jamás puede de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago, por ser su contenido netamente patrimonial. Así planteado, postula que no debe sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Asegura que la imprescriptibilidad conforme al derecho internacional de los derechos humanos no contempla las acciones civiles derivadas de los delitos o crímenes de lesa humanidad ni prohíbe o impide la aplicación del derecho interno.

Por último, plantea que el monto pedido sería excesivo, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado y los montos promedios fijados por los Tribunales de Justicia, que habrían actuado con mucha prudencia. En subsidio, señala que respecto a la regulación del daño moral debe considerarse los pagos ya recibidos de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación N°19.123 y 19.980. Alega la improcedencia del pago de intereses y reajustes.

Con fecha 26 de enero de 2021 se tiene por evacuada la réplica en rebeldía.



«RIT»

Foja: 1

Con fecha 2 de febrero de 2021 la demandada evacúa el trámite de la dúplica, reiterando sus defensas.

Con fecha 3 de febrero de 2021 se recibe la causa a prueba.

Con fecha 22 de octubre de 2021 se reanuda el término probatorio.

Con fecha 11 de febrero de 2022 se cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que del examen de los escritos de discusión, fluye que la tesis fáctica propuesta respecto de la detención ilegal, prisión y torturas sufridas por Alfredo Eduardo Saieg Lues, producto de la acción de agentes del Estado, verificadas durante el denominado “régimen militar” o simplemente la “dictadura”, son hechos no controvertidos.

En línea con lo anterior, no se rebate que por esos motivos el actor fue calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I, asignándole el número 22.004.

Por lo tanto, se tiene por establecido definitivamente y desde ya que Alfredo Eduardo Saieg Lues fue víctima de detención ilegal, prisión y torturas entre los años 1974 y 1978, en varias localidades de la Región de Valparaíso, todo producto de la acción de agentes del Estado, siendo dicho acto constitutivo de un crimen de lesa humanidad.

SEGUNDO: Que, no obstante, se debe consignar que la parte demandante rindió la siguiente prueba.

1.- En folio 33, copia de Norma Técnica del Ministerio de Salud de Chile, para la atención en Salud de Personas Afectadas por la Represión Política Ejercida por el Estado en el Periodo 1973-1990.

2.- En folio 33, copias de documentos elaborados titulados “Características del daño y trauma en afectados directos de violaciones a los DDHH” y “Transgeneracionalidad del daño” por el Psicólogo Freddy Silva G, en su calidad de Coordinador del Equipo PRAIS, Servicio de Salud Aconcagua.



«RIT»

Foja: 1

3.- En folio 33, copia de documento titulado “Conferencia Internacional, Consecuencias de la Tortura en la Salud de la Población Chilena, desafíos del presente”, emitido por el Ministerio de Salud de Chile, año 2001.

4.- En folio 33, copia de Informe en términos generales sobre las secuelas dejadas en el plano de la salud mental relacionadas con las violaciones a los Derechos Humanos, cometidas durante la dictadura militar, elaborado por PRAIS y suscrito por Paula Hinojosa Oliveros, Psicóloga de PRAIS.

5.- En folio 33, copia de artículo denominado “Represión política, daño transgeneracional y el rol del Estado como agente reparador”, escrito por el Psicólogo Clínico del programa PRAIS de la Araucanía Norte, don Sergio Beltrán P.

6.- En folio 33, copia de Informe denominado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico-psiquiátrico”, realizado por la Vicaria de la Solidaridad.

7.- En folio 33, copia de Informe denominado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental”, realizado por la Vicaria de la Solidaridad.

8.- En folio 33, copia de documento que se refiere a la tortura, tratos crueles e inhumanos y su impacto psicológico, las prácticas de amedrentamiento a la población, relegaciones y su impacto psicológico en las personas y en la familia, entre otros.

9.- En folio 33, copia de documento titulado “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos”, realizado por Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards, Ximena Taibo Grossi, Asistentes Sociales del Departamento Jurídico de la Vicaria de la Solidaridad.

10.- En folio 33, copia de documento titulado “Salud Mental y Violaciones a los Derechos Humanos”, realizado por el equipo de salud de la Vicaria de la Solidaridad.

11.- En folio 33, copia de documento elaborado por el equipo de profesionales de la salud de La Vicaria de la Solidaridad, denominado “Efectos con la salud física y mental en la población a consecuencia de la represión en las protestas y otras acciones masivas”.



«RIT»

Foja: 1

12.- En folio 33, copia de documento titulado “Estudio de salud mental en presos políticos en periodo de transición a la democracia”, realizado por el Neuropsiquiatra Jacobo Rizzo y la Psicóloga Viviane Freraut del equipo de salud mental del DITT (Detención, Investigación y Tratamiento de la Tortura) y CODEPU (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo).

13.- En folio 33, copia de documento titulado “Significado psicosocial de la tortura. Ética y reparación”, realizado por Elisa Neumann, psicóloga y por d Rodrigo Erazo, psiquiatra, del equipo médico psiquiátrico de FASIC.

14.- En folio 33, copia de Monografía denominada “Lo igual y lo distinto en los problemas psicopatológicos ligados a la represión política”, elaborada por el Psiquiatra Mario Vidal del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS).

15.- En folio 33, copia de documento titulado “Trauma Político y Memoria Social”, realizado por E. Lira y M. Castillo, del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS).

16.- En folio 33, copia de documento titulado “Tortura y Trauma Psicosocial”, realizada por el Médico Psiquiatra Carlos Madariaga, miembro del Comité Directivo y director clínico de CINTRAS.

17.- En folio 33, copia de documento titulado “Consecuencias Psicosociales de la Represión Política”, realizado por la Psicóloga Elizabeth Lira.

18.- En folio 33, copia de Monografía denominada “Aspectos psicosociales de la represión durante la dictadura”, realizado por María Teresa Almaraz, Psicóloga del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS).

19.- En folio 33, copia de Nómina de Presos políticos y Torturados, en la que aparece Luis Alberto Madariaga Álvarez, como víctima de prisión política y tortura reconocida por el Estado de Chile, signado con el número 13.677.

20.- En folio 33, copia de Monografía denominada “Tortura y trauma: el viejo dilema de las taxonomías psiquiátricas”, realizada por el Psiquiatra Carlos Madariaga, de CINTRAS.

21.- En folio 33, copia de documento titulado “Las peores cicatrices no siempre son físicas: la tortura psicológica”, realizado por el doctor Hernán Reyes, de la división de asistencia de la Cruz Roja Internacional.



«RIT»

Foja: 1

22.- En folio 33, copia de Capítulos III, V y VIII, del Informe elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

23.- En folio 33, copia de documentos denominados “La Tortura Modelo de Intervención” y “La Tortura Un Problema Médico”, ambos elaborados por el equipo de salud mental de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).

24.- En folio 33, copia de documento denominado “Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, situaciones represivas y experiencias traumáticas”, elaborado por el equipo de profesionales de salud mental del Instituto Latino Americano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS).

25.- En folio 36, copia de informe psicológico respecto de Alfredo Eduardo Saieg Lues, suscrito por Carolina Canales Cortés, psicóloga.

TERCERO: Que, además, en el folio 31 consta el oficio ORD. DSGT N°4792-3001, del Instituto de Previsión Social, de fecha 1 de septiembre de 2021, que informa sobre “beneficios de reparación” pagados a Alfredo Eduardo Saieg Lues.

En este oficio se comunica al Tribunal que el demandante, por ser víctima de Prisión Política y Tortura (Valech), recibe beneficios de reparación de las Leyes 19.992 y 20.874.

Se especifica en que Alfredo Eduardo Saieg Lues ha recibido por concepto de pensión Ley N°19.992 la suma de \$28.827.938; por concepto de aporte único Ley N°20.874 la suma de \$1.000.000; por concepto de aguinaldos la suma de \$518.325; siendo el total pagado \$30.346.263. El beneficiario falleció.

Se indica también que el demandante no ha recibido otros beneficios de reparación o previsionales en ese instituto.

CUARTO: Que, así las cosas, corresponde valorar las probanzas rendidas por las partes, comenzando por los instrumentos. En este sentido, no se registran impugnaciones fundadas en causal legal y acogidas respecto de ninguno de los que fueron puestos en conocimiento de la contraria, ni alegaciones de las virtudes formales de los públicos. En consecuencia, se reconoce a los instrumentos señalados el valor probatorio que la propia Ley les atribuye, según su naturaleza, salvo los privados emitidos por terceros y que no fueron ratificados en el juicio, que solo se tendrán como base de una presunción judicial.



«RIT»

Foja: 1

En efecto, la justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio corresponde hacerla en la forma dispuesta por el legislador. Por tanto, respecto de los instrumentos públicos, se advierte que emanan o fueron autorizados por un funcionario público, actuando en tal carácter y en materias de su competencia, contando con las formalidades que señala la ley, sin que la circunstancia de ser una copia les reste valor, precisamente por no haber sido impugnados.

De esta manera, los instrumentos públicos acompañados hacen plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, gozando de una verdadera presunción de autenticidad.

De cualquier manera y en una perspectiva general, se percibe como un hecho público y notorio que existe en la sociedad un consenso mayoritario acerca de que efectivamente se violaron los Derechos Humanos de muchas personas durante el gobierno autoritario del Pdte. A. Pinochet, conforme dan cuenta las condenas que se han sucedido desde que el país retomó el sendero democrático.

Por lo tanto, coherente con la defensa desplegada por el Fisco, no hay motivo serio y grave para dudar acerca de la verdad de los hechos relatados en estos informes, especialmente los confeccionados por la Comisión Valech, acompañados –en lo pertinente- en copia.

QUINTO: Que, en cuanto a las excepciones de reparación integral y pago opuestas por el Fisco, debe decirse que no consta en autos que se haya rendido prueba alguna respecto de aquello. Con todo, la defensa del actor no contravino que hayan recibido los beneficios y transferencias que señala el Fisco en su contestación, por ser una consecuencia necesaria del hecho de haber sido incluido en la nómina del informe realizado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, no debe olvidarse que el hecho fundante de la responsabilidad pretendida es un delito de lesa humanidad, esto es, aquellos actos que la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad considera cometidos *“como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”*, incluyendo asesinato, exterminio, prisión arbitraria, violación, tortura, persecución política, desaparición forzada y otros actos inhumanos graves, calificación jurídica que no fue objeto de debate entre las partes, motivo por el cual se debe atender a los principios generales del derecho



«RIT»

Foja: 1

internacional de los derechos humanos, integrados a nuestra legislación interna por disposición del artículo 5° de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho de las víctimas y otras personas a obtener la reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, puesto que *“el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”*.

En este sentido, conviene recordar que los artículos 1.1 y 63.1 del Pacto de San José de Costa Rica, publicado el 5 de enero de 1991, establecen lo siguiente:

“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera precedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

Por lo tanto, se constata una clara divergencia entre el contenido de las excepciones señaladas y lo dispuesto por la Convención Americana, debiendo estarse a esta última, atendida la naturaleza del ilícito, por cuanto la responsabilidad del Estado queda sujeta -en estos casos- a las reglas del derecho internacional, que excluyen –en todo aquello que sean contrarias a éste- las del derecho interno.

En consecuencia, atendido además que las leyes invocadas por la defensa fiscal no establecen verdaderas indemnizaciones sino que un conjunto de derechos y/o beneficios para las víctimas y sus familiares, como ocurre con las pensiones de reparación, medidas con las que el Ejecutivo y el Legislativo han intentado progresivamente hacerse cargo de un problema esencialmente humanitario, político y, en definitiva, histórico, no se avizora la existencia de incompatibilidad alguna con la indemnización pretendida en sede judicial, por ser diferente, siendo importante consignar que no está prohibido otorgarla y que así se ha hecho en múltiples sentencias.



SEPTIMO: Que, en base a los mismos argumentos, debe agregarse que la imprescriptibilidad de la acción penal trae como consecuencia la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción civil, producto del transcurso del tiempo, desde que el hecho generador de la responsabilidad es al mismo tiempo un delito de lesa humanidad, vale decir, no un ilícito civil cualquiera. De otra manera resultaría que se permite perseguir en todo tiempo y lugar estos crímenes, pero no así la responsabilidad civil, lo que no se entiende si se considera que evidentemente la responsabilidad penal es de mayor entidad que la patrimonial.

Por lo tanto y como este Tribunal ha señalado en pronunciamientos anteriores, aplica aquello de que quien puede lo más, puede lo menos, no pareciendo razonable un sistema que desintegre las responsabilidades que emanan de un mismo hecho, cuando éste tiene la connotación aludida con anterioridad.

OCTAVO: Que, así las cosas, descartadas las excepciones opuestas por la demandada, cabe destacar que respecto del daño moral la Excma. Corte Suprema lo ha conceptualizado como: *“un mal, un perjuicio o una aflicción en lo relativo a las facultades espirituales, vale decir, cuando se ocasiona a una persona un dolor o aflicción en sus sentimientos”* (R.D.J., T. LXVIII, secc. 4ª, pág. 168). Asimismo, ha sentenciado lo siguiente: *“Que el daño moral, como todo daño, debe ser probado por quien sostiene haberlo padecido; al menos cuando es la base de la obligación de repararlo, conforme al artículo 1698 del Código Civil. Sin embargo, en determinadas situaciones, por la naturaleza y características del daño material producido, particularmente cuando se trata de daño corporal, el daño moral es tan natural y perceptible en la víctima que es del todo razonable presumirlo. Así también ha sido resuelto (por ejemplo, Corte Suprema, rol 735-2015). En estas circunstancias se produce una alteración del peso de la prueba en cuanto, debiendo la víctima probar el daño, es el demandado quien tendría que probar que, debido a ciertos hechos o circunstancias, la víctima no sufrió efectivamente el daño que postula”* (Rol N° 12.176-2017).

Pues bien, el presente caso es justamente uno de aquellos en que *“el daño moral es tan natural y perceptible en la víctima que es del todo razonable presumirlo”*. En efecto, se trata del caso de un hombre sometido a un verdadero suplicio: golpizas grupales por medio de puños, patadas y objetos; aplicación de corriente en genitales y otras partes del cuerpo; colgamiento de muñecas con golpes; privación de alimentos, agua y baño; hostigamientos; y privación del sueño.



«RIT»

Foja: 1

Todo lo anterior en un contexto de privación injustificada de su libertad, repetidas veces y por un periodo de alrededor de 3 años.

La brutalidad de los funcionarios casi llegó al martirio, ya que en una de estas nefastas sesiones el sr. Saieg perdió la consciencia, siendo internado en el Hospital Naval, donde permaneció en coma, sin librarse en ese ambiente de ser malogrado.

Tales tratos, por cierto degradantes, que son consecuencia del actuar coercitivo de agentes del Estado, cuyo deber funcionario en ningún caso ni momento validó la adopción de procedimientos y medidas como las operadas en esta persona, abusando de una posición de poder y engendrando en la víctima una sensación de vulneración, despojo e incertidumbre persistente, que razonablemente no pueden tenerse como inermes o carentes de carga emocional, son un elemento definitivamente esclarecedor de lo que podría retratarse como una auténtica desdicha personal, por lo que al tenor de lo que disponen los artículos 426 del Código de Procedimiento Civil y 1712 del Código Civil, se presume que el actor fue lesionado en su esfera inmaterial y en magnitud importante, puesto que los abusos que sufrió fueron más allá de los golpes y amenazas, llegando incluso a ser privado de lo más elemental, como el agua, los alimentos, el sueño y, en definitiva, la paz.

No podría concluirse de otra manera, desde que el Estado de Chile ha reconocido oficialmente al demandante como víctima de prisión política y tortura, a partir de lo cual y en conjunto con los otros antecedentes adjuntados al proceso, y, especialmente, que estos hechos no fueron cuestionados en el juicio, solo cabe creer en la versión entregada, y en relación al dolor moral invocado, tenerlo por serio y grave, por no poder esperarse otra cosa.

Pues bien, conforme al juzgamiento efectuado por el Tribunal de los hechos narrados y la afectación del demandante en su dimensión espiritual, que se aprecia como permanente, se concluye en justicia el otorgamiento de una satisfacción de reemplazo, que en prudencia y equidad, a la luz del mérito de los antecedentes y de otras sentencias, se determina en la suma única y total de \$100.000.000, que se deberá pagar más reajustes e intereses legales, desde que esta sentencia resulte ejecutoriada.

NOVENO: Que los documentos no considerados especialmente en nada inciden o alteran la decisión que se hará, siendo innecesarios, debiendo estarse a su valoración y a las razones por las que se acogerá la presente demanda.



«RIT»

Foja: 1

DECIMO: Que no se condenará en costas a la parte demandada, por estimarse que litigó con motivo plausible.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la Constitución Política de la República; I. b) de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad; 7.1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; 1437, 1698, 1699, 1700, 1702, 1706, 2314 y siguientes, 2514 y 2515 del Código Civil; y 144, 170, y 342 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I. Que se rechazan las excepciones de reparación integral, pago y prescripción alegadas por la parte demandada.

II. Que se acoge la demanda, solo en cuanto se condena a la parte demandada a pagar \$100.000.000 al demandante, por concepto de indemnización por daño moral, más reajustes e intereses.

III. Que no se condena en costas.

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Rol C-4050-2020

DICTADA POR DON MATIAS FRANULIC GOMEZ, JUEZ TITULAR DEL VIGESIMO NOVENO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, dieciséis de Febrero de dos mil veintidós**



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa. A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>